El Salvador proceso

informativo semanal

año 12
número 494

noviembre 13
1991

ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- El segundo aniversario de la masacre de la UCA
- La difícil coyuntura de la negociación
- La marcha de la guerra en la recta final de la negociación
- Aspectos de la reforma a la ley de impuesto al patrimonio
- Fuertes ataques contra ONUSAL

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

El segundo aniversario de la masacre de la UCA

Han transcurrido ya dos años desde la masacre de la UCA. Dos años en los cuales el proceso salvadoreño, de suyo vertiginoso, ha experimentado cambios de importancia.

Quizá los cambios más relevantes se aprecien en el escenario de la negociación, una causa por la cual lucharon tanto, en la última década de su vida, los jesuitas masacrados, y a la cual su muerte ha seguido aportando luz, inspiración y eficacia, en una medida en cierto sentido mayor que lo que ellos pudieron hacerlo en vida.

Ciertamente, todavía no hay lugar para los optimismos exacerbados, pero las perspectivas de la solución negociada son ahora **toto caelo** distintas que las de hace dos años. Después de casi año y medio de haber sido reanudada bajo los auspicios de la ONU, la negociación ha experimentado por fin, tras la reciente ronda de Nueva York, un impulso que parece haberla encaminado irreversiblemente hacia la solución política del conflicto en el corto plazo. El hecho de que el proceso haya llegado hasta donde ha llegado no hubiese sido posible sin el aporte de los jesuitas mártires de la UCA, particularmente del P. Ellacuría, quien hace más de una década, en el editorial de ECA de enero-febrero de 1981, afirmaba convencido —cuando casi nadie más compartía tal apreciación— que la única alternativa razonable y cristiana para la solución del conflicto salvadoreño había de buscarse por la vía de la negociación, la cual constituía "una necesidad histórica y una exigencia ética" (**ECA**, 1981, **387-388**).

El FMLN acababa de lanzar en aquel momento (enero de 1981) su célebre "ofensiva final", que después llamó "general", y que marcó formalmente el estallido del conflicto armado en El Salvador. De parte y parte, casi todos apostaban a la guerra como modo de resolver la ingente crisis social del país. Con todo, paulatinamente, el llamado de la UCA en favor de la negociación fue encontrando eco en otras voces que también querían lo mejor para el país. A partir de aquel editorial de ECA, en que la mirada prudente del P. Ellacuría —en el sentido etimológico del pro-vidente, que ve más lejos que los demás porque tiene la mirada puesta más allá del inmediato presente— avizoró, no sólo la eticidad, sino incluso la mayor viabilidad histórica de la negociación frente a las vías militares, la UCA se fue constituyendo en una promotora incansable de la solución dialogada al conflicto. Por ello pagó un alto precio. Su defensa del diálogo, indisociable de su crítica contra quienes llevaban la mayor responsabilidad en la represión y/o sacaban los mayores beneficios de la guerra, le concitó el odio visceral de poderosos sectores sociales y políticos del país, a la cabeza de ellos la

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

Fuerza Armada, a quien el P. Ellacuría visualizó siempre —otra vez desde su mirada pro-vidente— como el obstáculo fundamental para una genuina convivencia democrática en El Salvador. "No habrá democracia sin la democratización de la Fuerza Armada", insistió muchas veces (**ECA**, 1989, **485**, p. 188).

La intransigencia de la Fuerza Armada constituye, precisamente, una de las limitaciones más serias que enfrenta todavía la negociación, y que han determinado que ésta no haya experimentado mayores avances. Las denuncias del COPREFA sobre una presunta "tercera ofensiva" del FMLN; la campaña de amenazas contra ONUSAL orquestada por los frentes de fachada de la Fuerza Armada —el Frente Anticomunista Salvadoreño y la Cruzada Pro Paz y Trabajo—; las recientes críticas del viceministro de seguridad, coronel Orlando Montano, contra las presuntas inconstitucionalidades de la última propuesta de la ONU sobre la nueva Policía Nacional Civil, son algunos signos externos de esa intransigencia. La resolución misma del caso judicial de la UCA muestra también, en contra de lo expresado por Cristiani y Bush, que la situación de impunidad de que ha gozado secularmente la Fuerza Armada no ha cambiado sustancialmente. Sigue siendo "indispensable una reforma a fondo del poder judicial. Nacional e internacionalmente, el poder judicial de El Salvador es responsabilizado de deficiencias gravísimas, no sólo a la hora de dejar impunes crímenes horrendos, sino a la hora de tratar delitos políticos", reiteraría sin duda, a propósito de esta situación, el P. Ellacuría, tal como lo afirmaba en 1986, en su "Replanteamiento de soluciones para el problema de El Salvador" (**ECA**, 1986, **447-448**).

No obstante, por otro lado hay signos que sugieren una incipiente metamorfosis de la sociedad salvadoreña. La denuncia pública de la masacre de El Mozote es uno de ellos, como lo es también el hecho de que los militares salvadoreños no se hayan precipitado a seguir el ejemplo de sus homólogos de Haití, cuando los Acuerdos a que el gobierno ha llegado con el FMLN en la negociación los tienen tan descontentos. La Fuerza Armada mantiene aún una enorme capacidad de sobredeterminación sobre la sociedad civil y sobre el Estado, pero en cierto modo la impunidad de los militares empieza a ceder. El sistema judicial pugna por reformarse. La conciencia colectiva muestra mayor sensibilidad por la problemática de los derechos humanos. La concertación económico-social se impone como una necesidad cada vez más urgente.

Paradójicamente, la masacre de la UCA, con la cual la Fuerza Armada creyó liberarse de sus críticos más molestos, ha contribuido decisivamente a esos avances, al constituirse en la denuncia más rotunda de los jesuitas mártires sobre la tragedia de El Salvador. El Salvador todavía vive su tragedia pero, gracias a esa sangre martirial, empieza a ser un país distinto.

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

La difícil coyuntura de la negociación

El 3 de noviembre recién pasado, tras un receso convenido para la realización de consultas, se reanudaron las negociaciones entre el FMLN y el gobierno salvadoreño, en la capital mexicana. La jornada previa, concluida el 22 de octubre anterior, dejó en pie una serie de escollos que deben ser sometidos nuevamente a la mesa de discusión. Las cuestiones relativas a la estructuración y composición de la Policía Nacional Civil, a la formación de la comisión encargada de la evaluación y depuración de la Fuerza Armada (comisión **ad hoc**), así como a las modalidades y procedimientos posibles de un cese de fuego (**Proceso 492-493**) están aún por definirse y convenirse. Y ello sin tomar en cuenta que el problema económico-social es un tema fundamental que resta ser abordado en su totalidad. Es, pues, frente a estos retos que se inició y se ha venido desarrollando la nueva y decisiva fase negociadora.

Si bien los retos son difíciles, el contexto socio-político nacional en que se verifica la actual jornada de negociaciones se ha tornado más que difícil, muy preocupante y peligroso. Tal coyuntura se ha venido definiendo por una serie de características particulares que, aunque por un lado marcan perspectivas positivas a futuro, por otro señalan las graves contradicciones que para algunos sectores ha significado la negociación, y los grandes riesgos que aún asechan a las posibilidades de paz en el país.

En primer lugar, pese a lo que falta por recorrer, la certeza de que el proceso ha avanzado y es ya irreversible parece ser compartida por ambas partes. Tanto los funcionarios gubernamentales, como los miembros del FMLN han coincidido en que se está cerca de acuerdos globales y que el cese de fuego podría ser firmado antes de concluir el año. Es en este sentido que el jefe de la delegación gubernamental, Dr. Oscar Santamaría, aseguró un día después de iniciadas las discusiones que la negociación se encuentra "en la recta final". Cuatro días más tarde, otro miembro de dicha delegación, el coronel Mauricio Vargas, añadió: "estamos en el principio del fin, y el fin está muy cerca". En lo fundamental, esta apreciación optimista del proceso ha sido compartida por personeros de distintas fuerzas sociales y, aunque con mucha mayor prudencia, por los mismos voceros de la mediación.

En segundo lugar, como es ya tradición en las etapas decisivas del proceso negociador, las violentas y amenazantes voces de la ultraderecha han aparecido una vez más en la escena. En esta ocasión, uno de sus principales voceros, la Cruzada pro Paz y Trabajo, y un nuevo grupo paramilitar clandestino autodenominado Frente "Mayor Azmitia", se han manifestado oponiéndose a la negociación y calificando de traidor al gobierno de ARENA.

La Cruzada pro Paz y Trabajo, en comunicado publicado en la prensa local el 4 de noviembre, acusó al gobierno de "haber concedido todo" al FMLN. Además, reprochó al alcalde capitalino, Armando Calderón Sol, y a la dirigencia gubernamental en general, el secreto en que se han firmado documentos políticos y el engaño al que se ha sometido a la población. "Dios —concluye el comunicado— castiga el engaño y la traición". Al respecto, El Diario de Hoy, otro vocero de la derecha histérica que suele acompañar las manifestaciones de la Cruzada, citando a miembros de tal organización, señaló que "los delegados gubernamentales no son dueños del pueblo, ni de la nación, como

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

para adquirir y firmar compromisos que pongan en peligro el futuro de El Salvador". Finalmente, el Frente "Mayor Azmitia" advirtió al gobierno que "deben cesar las concesiones al FMLN, pues se pone en peligro el futuro de la Fuerza Armada".

Con estas manifestaciones, la ultraderecha continúa con su táctica de atacar el flanco más débil, y el único suceptible a sus vociferaciones y presiones: el gobierno de Cristiani. Ya entre marzo y abril, con motivo de las deliberaciones en torno a las reformas constitucionales, y ante la inutilidad de agredir a la parte mediadora o provocar la retirada de la contraparte, habría recurrido también a estos chantajes.

A nadie en El Salvador es desconocida la larga y violenta historia con que la extrema derecha ha rubricado su rechazo irracional a la negociación. La ceguera política y social de estos pequeños pero poderosos grupos, que se resisten a perder sus privilegios y su impunidad, sigue vigente.

Una de las cosas más preocupantes en este punto es la falta de una respuesta enérgica del gobierno que, a diferencia de sus ataques frontales y calumniosos contra el movimiento popular cuando éste ejecuta acciones de protesta reivindicativa, más bien se ha limitado a lamentar que haya sectores que aún no han comprendido suficientemente los acuerdos, como lo hizo el alcalde Calderón Sol.

En tercer lugar, el inicio de la nueva jornada negociadora se ha enmarcado en un renovado incremento de las acciones militares (**Proceso 493**). Sobre esto, funcionarios gubernamentales y castrenses han venido señalando insistentemente la realización de acciones guerrilleras de desgaste y sabotaje, para acusar al FMLN de incumplir los acuerdos y de contradecir con sus acciones armadas lo que sostienen en la mesa de negociación. Es en este sentido que el Presidente Cristiani fustigó, el 5 de noviembre, al FMLN por el sensible incremento de los sabotajes contra la red del tendido eléctrico nacional. Calderón Sol, por su lado, comentó que si la guerrilla habla de firmar la paz en Navidad e incorporarse a la vida democrática del país, "lo lógico es que detenga su actividad terrorista y dé muestras concretas de que realmente quiere terminar la guerra". A su vez, el coronel Ernesto Vargas afirmó que la violencia del FMLN entorpece las conversaciones y que "el desescalamiento de sus acciones darán un ambiente propicio al proceso".

En la misma línea, al iniciarse las reuniones, el gobierno interpuso una protesta formal ante la mediación por el incremento de las acciones guerrilleras, las cuales interpretó como contradictorias con la expresada voluntad insurgente de lograr una pronta suspensión de las acciones armadas. Más tarde, el Ministro de Defensa, general René Emilio Ponce, y otros jefes castrenses y funcionarios gubernamentales calificaron las operaciones guerrilleras como una "tercera ofensiva" del FMLN. Consecutivamente, reafirmando la definición castrense de tales acciones, el Presidente Cristiani advirtió que el gobierno "podría retirarse de la mesa de negociación, mientras no haya un ambiente propicio para continuar".

Sin embargo, las acciones ofensivas del FMLN no han sido tales como sostiene la propaganda gubernamental —apoyada por los principales medios de prensa escrita— y sus acusaciones carecen en mucho de objetividad. En primer lugar, porque el incremento de las acciones armadas ofensivas no ha sido unilateral. Ambos ejércitos poseen cuotas de responsabilidad en el tensionamiento de la situación militar. En segundo, porque en su mayoría las acciones ejecutadas por el FMLN se han verificado como respuesta a los operativos contrainsurgentes que realiza el ejército en zonas de presencia o tradicional control guerrillero. Baste señalar las grandes concentraciones de tropa en lugares como Guazapa, donde se ubicaron

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

seis batallones de caballería y artillería, o Cinquera, en Cabañas, donde fueron reunidas doce compañías con apoyo aéreo. En tercer lugar, porque si bien el sabotaje rebelde ha sido intenso, no es en nada comparable a los gigantescos operativos contrainsurgentes que el ejército ha estado ejecutando en las zonas norte y oriental del país, o a los constantes y prolongados bombardeos de la Fuerza Aérea en el área de Guazapa. Acciones que, por cierto, no han merecido mayor atención de la prensa escrita local.

De esta suerte, si de generar un "ambiente propicio" al proceso se trata, el FMLN no es el único a ser interpelado, pues a la Fuerza Armada corresponde una sustancial cuota de responsabilidad.

Por su lado, el FMLN, en lo que toca a la acusación castrense de una "tercera ofensiva" guerrillera, ha reaccionado calificándola como una "campaña sucia de guerra psicológica"; y ha indicado, frente a la amenaza gubernamental de abandonar la mesa de discusión, que tal actitud es resultante de las presiones que están ejerciendo sectores contrarios a la paz.

De cualquier forma, la postura gubernamental y su amenaza de retirarse de las negociaciones son hechos contraproducentes para el proceso de negocación, quizás más negativos aún que las acciones armadas mismas. De allí que el gobierno debe medir muy bien las consecuencias de sus actitudes que, por limar asperezas con grupos de la derecha más intransigente, pueden poner en peligro, aun cuando sólo sea coyunturalmente, la viabilidad del proceso negociador.

Una cuarta característica, que ha marcado el inicio de la presente jornada, es el empeño con que los voceros gubernamentales realizan una campaña propagandística orientada a vender la idea de que las posibilidades de paz descansan en la "voluntad política" del FMLN. Tanto los miembros de la comisión gubernamental de diálogo, como altos funcionarios del gobierno y de la Fuerza Armada han insistido en que el cese del enfrentamiento armado sólo depende de la voluntad y la actitud que adopte el FMLN. Lo que el gobierno elude con este argumento es someter al conocimiento y discusión pública los verdaderos obstáculos a que se está enfrentando el proceso negociador, y que en lo fundamental se ubican en los puntos de depuración y reestructuración de la Fuerza Armada.

En quinto y último lugar, la coyuntura de la actual jornada negociadora también ha estado marcada por un progresivo tensionamiento de los conflictos laborales en el sector público. Las acciones sindicales iniciadas desde los primeros días del mes y orientadas a la reivindicación de demandas salariales, han generado una confrontativa e intolerante respuesta gubernamental. En este marco, las instalaciones del Ministerio de Hacienda han sido militarizadas, y la directiva del sindicato de trabajadores de ese Ministerio (AGEMHA) ha sido destituida.

Pese a todo esto, las perspectivas de la actual jornada son positivas. Los logros alcanzados en la anterior ronda pueden servir para calibrar el ritmo que al proceso logró imprimir la cita de Nueva York. La ratificación de las reformas constitucionales en materia judicial, así como los avances en el trabajo y conformación definitiva de COPAZ (**Proceso 493**) pueden contribuir también en mucho a mantener el clima de optimismo en que hasta el momento se mueve la negociación.

Por lo pronto, quedan aún importantes dificultades que sortear, y la posibilidad de acordar un cese de fuego definitivo deberá esperar acuerdos políticos globales y concretos. Todavía falta por ver hasta dónde se avanza en los puntos pendientes sobre Fuerza Armada y si se logra entrar a la consideración del tema económico-social.

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

La marcha de la guerra en la recta final de la negociación

La actividad militar y el proceso de negociación en los primeros días de noviembre, al igual que en el mes anterior, han continuado marchando lado a lado (**Proceso 493**).

El accionar ofensivo del FMLN en sus diversas modalidades ha experimentado un sensible incremento como respuesta a los operativos contrainsurgentes impulsados por el ejército. El día 3, la insurgencia dio inicio a una nueva campaña de sabotaje contra la red del tendido eléctrico nacional, mientras que, en la madrugada del 5 de noviembre, lanzó un operativo conjunto contra posiciones de la Fuerza Armada en la zona norte del área suburbana de San Salvador y en otros puntos de los departamentos de San Miguel y Usulután. Estas acciones se han realizado en el marco del desarrollo de una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno y el FMLN en ciudad de México, las cuales se encuentran en una etapa decisiva.

En términos estadísticos, los reportes de COPREFA correspondientes a la primera semana de noviembre registraron 14 combates de encuentro y 18 ataques rebeldes en diez departamentos del país. Este accionar bélico dejó un saldo de 47 bajas (14 muertos y 33 heridos) en las filas del ejército y 104 bajas (28 muertos y 76 heridos) en las del FMLN. Por su parte, según radio Venceremos, en el período comprendido entre el 1 y el 9 de noviembre, el FMLN ocasionó 119 bajas a la Fuerza Armada.

La actividad militar durante el período apuntado se distribuyó de la manera siguiente: Cuscatlán, 4 combates de encuentro y 2 ataques rebeldes; Cabañas, 2 combates y 2 ataques; Usulután, 1 combate y 3 ataques; San Salvador, 6 ataques; San Miguel, 1 combate y 2 ataques; Morazán, 1 combate y 1 ataque; Chalatenango y La Unión, 2 combates, respectivamente; La Libertad, 2 ataques; y, finalmente, San Vicente, 1 combate.

Accionar bélico reciente

Los pricipales combates de encuentro durante el período en cuestión se suscitaron en los departamentos de Cuscatlán, Cabañas y Chalatenango. El ejército, al parecer, está empeñado en hacer prevalecer sus posiciones en estratégicos puntos del centro y norte del país.

En Cuscatlán, los combates se desarrollaron en las proximidades de la finca Guancora, en los cantones El Morro y Aguacayo y en el caserío Valle Nuevo, todos ellos localizados en la jurisdicción de Suchitoto. En Cabañas, los combates tuvieron por escenario el cantón Los Artigas (Tejutepeque) y el cerro El Torro (Sensuntepeque). En Chalatenango, ocurrieron en el cerro El Candelero (Dulce Nombre de María) y en la loma Malacatal (San Fernando Morazán).

El accionar ofensivo del FMLN se manifestó a través de diversas modalidades, entre ellas el establecimiento de retenes de control en las principales carreteras del país. Así, fuerzas insurgentes lo hicieron en las carreteras entre Soyapango-Tonacatepeque y Nejapa-Quezaltepeque (San Salvador), así como en la carretera entre Chapeltique y Ciudad Barrios (San Miguel), y a la altura del kilómetro 11 de la carretera Troncal del Norte. En estos lugares, se suscitaron fuertes choques de encuentro con efectivos castrenses cuando éstos procuraron desalojar a las unidades insurgentes.

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

Los ataques rebeldes a puestos de defensa y a patrullas del ejército se concentraron en sectores suburbanos de San Salvador y de otras ciudades del interior. Las acciones más destacadas de esta naturaleza se desarrollaron en el sector nor-oeste de Santiago de María, en el departamento de Usulután. Según voceros de la Sexta Brigada de Infantería, en esos combates los rebeldes sufrieron al menos 30 bajas. En San Salvador, en la periferia de Apopa, se suscitaron fuertes combates, que se prolongaron por espacio de ocho horas y abarcaron las colonias Habitat, San Luis Los Almendros y Elisa. En cambio, en las colonias San José Las Flores, Popotlán, Chintuc 1 y 2, en el mismo sector, donde también se hicieron presentes las fuerzas rebeldes y mantuvieron contacto con la población civil, no se produjeron enfrentamientos. El FMLN emprendió otras acciones menores de hostigamiento en la periferia de Osicala (Morazán), en Villa Victoria (Cabañas) y contra las instalaciones de la defensa civil del cantón San Diego, en las proximidades de la ciudad portuaria de La Libertad.

En lo relativo al accionar urbano, los comandos Modesto Ramírez protagonizaron pequeñas escaramuzas al atravesar buses del transporte colectivo y quemar llantas en varias arterias vehiculares de San Salvador. De estas acciones, las más destacadas sucedieron sobre la 75 avenida norte y calle a San Antonio Abad, y sobre el boulevard Venezuela, a la altura de la colonia Ferrocarril. En otras acciones, efectivos del Regimiento de Caballería que custodiaban los tanques de agua contiguos a la Residencial Holanda fueron atacados con fuego de fusilería por comandos urbanos, sin sufrir bajas. De igual manera, fuerzas insurgentes realizaron un atentado dinamitero contra las oficinas del Servicio Territorial de la Fuerza Armada y de Acción Cívica Militar, localizadas en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Nacional, en la colonia Atlacatl. Al menos 30 casas particulares aledañas al lugar de la explosión sufrieron daños materiales.

Las acciones rebeldes de sabotaje contra la infraestructura económica comprendieron, por su parte, ataques a las instalaciones de la finca El Tigre (Usulután); del beneficio MECAFE, en las proximidades de Nejapa (San Salvador); y de la fábrica de productos de henequén SALVAMEX, en San Miguel. En esta última acción, el FMLN destruyó por completo las instalaciones, que fueron incendiadas y dinamitadas, reduciendo a escombros bodegas, maquinaria, materia prima y productos terminados. Las pérdidas se estimaron en al menos 10 millones de colones.

El sabotaje rebelde contra la infraestructura eléctrica ha mantenido su elevada intensidad de las semanas anteriores. Las unidades zapadoras rebeldes no han dado tregua en su labor de boicot al sistema del tendido eléctrico nacional. Al menos cinco líneas primarias de transmisión y tres de sub-transmisión se han mantenido crónicamente fuera de servicio en el presente período. De igual forma, por lo menos 21 estructuras, entre torres y postes, han sido dinamitadas.

Respuesta gubernamental a la campaña rebelde

Los hechos anteriores han desencadenado una fuerte reacción de condena contra el FMLN por parte de las más altas instancias gubernamentales. El Presidente Alfredo Cristiani, el alcalde de San Salvador, Armando Calderón Sol, y el jefe de la comisión gubernamental de diálogo, Oscar Santamaría, han descalificado con los más duros términos las acciones ofensivas rebeldes, argumentando que éstas carecen de legitimidad y de sentido, al producirse en el

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

marco de una etapa determinante del proceso de negociación. El Presidente Cristiani incluso ha llegado a amenazar con retirar a la delegación gubernamental de la mesa de negociación —a pesar del costo político que eso le supondría— si el FMLN no suspende tal accionar ofensivo. "Pudiéramos tomar la determinación de levantarnos de la mesa y mientras no haya un ambiente propicio no regresamos", puntualizó Cristiani el pasado 11 de noviembre. Todas estas objeciones en su conjunto, sin embargo, adolecen de falta de objetividad, al formularlas sin tomar en cuenta todos los elementos reales que contextualizan el accionar insurgente.

Para evaluar objetivamente la reciente campaña ofensiva del FMLN, deben ser considerados al menos los elementos siguientes: En primer término, la actividad militar no ha sido impulsada unilateralmente por el FMLN. El ejército ha contribuido con la mayor cuota en el tensionamiento de la situación militar al lanzar gigantescos operativos de rastreo y desalojo en las zonas de tradicional presencia guerrillera en todo el país. Los constantes bombardeos lanzados sobre el cerro de Guazapa a lo largo de todo el mes de octubre son tan sólo un pequeña muestra del accionar ofensivo del ejército. La respuesta del FMLN, desde esta perspectiva, puede considerarse como reacción de defensa. Si se quiere formular una condena, habría que afirmar que las acciones de ambos ejércitos producen daños y trastornos a la población civil.

En segundo término, aun cuando el accionar de sabotaje rebelde ha sido intenso —y, en términos políticos para el FMLN, continúa siendo un rubro contraproducente, desafortunado e impopular— el accionar estrictamente ofensivo del FMLN no posee la magnitud ni la envergadura que la propaganda gubernamental le achaca. Las acciones ofensivas insurgentes han sido hasta ahora sumamente selectivas y en la mayoría de los casos han perseguido más que un componenete militar un componente político al acercarse a la población civil para divulgar sus posiciones en el actual momento histórico que vive la nación. En base a todo ello, el FMLN ha acusado al Presidente Cristiani de efectuar "una sucia campaña de guerra psicológica con la intención de inculparnos por la vigencia de una crisis que ellos mismos han impuesto".

Ante la intensificación de los combates, el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, ha expresado su profunda preocupación, y ha reiterado la necesidad de que se firme un cese de fuego este año. La autorizada voz del secretario general clama para que cese la estéril y extemporánea disputa territorial entre las partes. Los combates actuales, ha afirmado Pérez de Cuéllar, "son fútiles y no pueden producir más que víctimas y destrucción en momentos en que la paz se divisa en el horizonte". Una reducción del conflicto "que debería surgir de un esfuerzo de moderación contribuiría enormemente al ambiente favorable a la negociación y aumentaría el consenso en El Salvador en favor de una solución política negociada".

Es innegable que el fin de la guerra está cercano y que no corresponde únicamente al FMLN, sino también a la Fuerza Armada, contribuir para que los términos de la transición sean los más pacíficos posibles.

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

Aspectos de la reforma a la ley del impuesto al patrimonio

Recientemente, el proceso de reorientación económica contemplado en el Plan de Desarrollo Económico del gobierno parece estar cobrando nuevos dinamismos. En los últimos días, se ha procedido a la venta de las acciones de los primeros bancos a reprivatizar, y se ha anunciado la próxima privatización de varias empresas estatales, como parte de un plan de reformas institucionales y legales para la reorientación económica. También se ha dado a conocer un decreto legislativo mediante el cual se reforma la ley de impuesto sobre el patrimonio, para gravar los depósitos bancarios de las personas jurídicas nacionales. Esta reforma podría resultar inconsistente con otras medidas de política económica impulsadas por el gobierno, en la medida que tal gravamen puede desestimular el ahorro interno.

La justificación gubernamental para adoptar tal medida es que ésta podría favorecer el logro de los objetivos de las políticas financieras de estabilización y reorientación económica, específicamente dentro de la política fiscal y las políticas cambiaria y comercial. Disminuir el déficit fiscal mediante incrementos de los ingresos fiscales, disminuir la sobrevaloración del colón y mejorar el saldo de la balanza comercial podrían ser los objetivos que se persiguen con la reforma tributaria en cuestión.

Sin embargo, el discurso oficial define como único objetivo de dicha medida incrementar los ingresos tributarios para financiar el creciente gasto público. Aun cuando el financiamiento del gasto público para 1992 obligue a incrementar los ingresos —entre 1991 y 1992 el gasto público se incrementó en 35.5% en términos nominales y en 24.3% en términos reales— la mencionada reforma a la Ley del impuesto al patrimonio tiene efectos que permiten afirmar que su implementación no persigue exclusivamente expandir los ingresos tributarios. El gobierno quiere presentar la reforma como una medida destinada a financiar el gasto público, obviando las posibles implicaciones que la misma podría tener sobre otras variables que se desean afectar, como el tipo de cambio.

Adicionalmente, aunque se están generando costos sociales como producto del plan de gobierno, no se está promoviendo una mayor participación porcentual del gasto social en el presupuesto de la nación, lo cual, en un proceso de reorientación económica como el que el gobierno pretende impulsar, implicará un deterioro del bienestar de la mayoría de la población.

Objetivos de política económica

La reforma tributaria mencionada, además de expandir los ingresos tributarios, podría disminuir la sobrevaloración de la moneda. La expansión de los ingresos tributarios no es el único efecto posible de fijar gravámenes a los depósitos bancarios. Existen también los efectos sobre el tipo de cambio y el comercio externo. El papel de las transferencias y el ingreso de capital al país en la estabilización del tipo de cambio es decisivo. No se ha logrado sanear el déficit existente en la balanza comercial, y la oferta de divisas se mantiene por las transferencias y entradas de capital que se registran. Por ello, cualquier medida que estrangule el flujo de estos fondos provocará presiones hacia el alza del tipo de cambio.

La introducción de gravámenes a los depósitos bancarios de las personas jurídicas nacionales podría constituirse en un de-

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

sestímulo a la entrada de capitales y a la demanda de cuentas bancarias en el sistema financiero nacional por parte de las empresas. Es posible esperar una disminución de los depósitos bancarios a nombre de personas jurídicas, originada en la distorsión que introduciría un incremento de los impuestos. La magnitud del efecto dependerá de forma directamente proporcional de la tasa impositiva que se fije. Consecuentemente, la reforma de la Ley del impuesto al patrimonio podría ejercer fuertes presiones hacia el deterioro de la cuenta de capital de la Balanza de Pagos, la cual ha estado presentando saldos positivos por la fuerte entrada de capitales tanto privados como oficiales; y un consecuente incremento del tipo de cambio.

A su vez, un aumento del tipo de cambio presuntamente aumentaría la competitividad de las exportaciones nacionales y, por ende, promovería la expansión del sector exportador, asunto de vital importancia dentro del proceso de reorientación económica. Sin embargo, la contrapartida de esta situación sería una aceleración del proceso inflacionario y el consecuente mayor deterioro de las condiciones de vida de la población, especialmente si se considera que no existe una estrategia social adecuada en el plan social del Gobierno.

Repercusiones e inconsistencia

En términos de la reorientación económica pretendida, la reforma a la Ley del impuesto al patrimonio podría acarrear efectos positivos en el ámbito de medidas de política financiera de estabilización y reorientación económica, específicamente en materia fiscal, cambiaria y comercial. Los efectos negativos de tal medida se presentan en términos del deterioro de las condiciones de vida y de la creación de desestímulos al ahorro interno. Un incremento del tipo de cambio provocará un incremento de la tasa inflacionaria y, consecuentemente, una reducción de los ingresos reales de las familias, acelerando el deterioro de las condiciones de vida de la población de menores ingresos. Por otra parte, la introducción de distorsiones al sistema financiero desestimulará el ahorro de las empresas nacionales, y por tanto, reproducirá la dependencia que el país tiene del capital extranjero. Aquí se plantea una inconsistencia de políticas puesto que dentro de las políticas de reducción de la dependencia externa se encuentra la promoción del ahorro interno. El problema se torna más grave en el contexto de la necesidad extraordinaria de fondos para financiar la inversión necesaria para la modernización de la economía.

Los costos de la etapa inicial del programa de ajuste estructural en términos de reducción del empleo e ingreso constituyen un punto cuestionante, sobre todo si se considera que la situación ya de por sí es precaria y que no existe una estrategia social que esté en capacidad de hacer frente a los costos del ajuste. Pese a que el presupuesto nacional ha contemplado incrementos absolutos en los montos destinados a los ministerios de salud y educación (172 y 125 millones de colones, respectivamente), la estructura porcentual del presupuesto evidencia una disminución de la participación de los ministerios mencionados. Entre 1991 y 1992, la salud y la educación disminuyeron su participación porcentual en la estructura del presupuesto en 1.42% y 0.28%, respectivamente.

Las medidas de política económica contempladas por las políticas para la reorientación económica se perfilan como las que mayores costos acarrearán para los sectores de bajos ingresos. La concertación se presenta como una necesidad imperativa para promover el bienestar y el crecimiento económico mediante la adopción de un plan de desarrollo consistente y, sobre todo, consecuente con la búsqueda del bienestar para todos.

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

Fuertes ataques contra ONUSAL

Como producto —y garantía— del cumplimiento del Acuerdo sobre derechos humanos firmado en San José el 26 de julio de 1990, se estableció en el país, el 26 de julio recién pasado, la Misión de Observadores de las Naciones Unidas (ONUSAL). A pesar de que ello requería ciertas condiciones, ambas partes por separado solicitaron la pronta instalación de la Misión sin esperar a que se llegara a un acuerdo de cese al fuego, como era condición establecida en el Acuerdo. Los distintos sectores sociales habían insistido también en la urgencia de su pronta instalación para dar fuerza a lo acordado y para asegurar, en la medida de lo posible, la disminución de las violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, y a pesar de la aceptación generalizada y esperanzada del conglomerado social, los siempre opuestos a todo lo que contribuya a resolver el conflicto de una manera justa para la sociedad salvadoreña, grupos extremistas de derecha y sus fuerzas privadas han desarrollado una fuerte campaña de ataques contra la Misión. Antes de la instalación de la ésta, circularon amenazas en hojas volantes, firmadas por el autodenominado Frente Anticomunista Salvadoreño (ONUSAL), las cuales iban dirigidas no sólo contra los miembros de ONUSAL, sino también contra "todos aquellos que de alguna forma brindaran algún servicio a extranjeros o nacionales que pertenecieran a organizaciones como: Naciones Unidas, ONUCA, Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras, CICR, ACNUR". Quienes así lo hicieran estarían contribuyendo con el "comunismo que busca apoderarse de nuestro territorio nacional". Las sanciones ofrecidas eran las típicas amenazas de la ultraderecha: la muerte tanto de la persona directamente acusada como de sus familiares.

En esa ocasión, el gobierno y las distintas organizaciones sociales, gremiales, sindicales y de derechos humanos, así como la Iglesia, brindaron su respaldo a la instalación de la Misión. No obstante, en los últimos días han vuelto a presentarse nuevos ataques contra ONUSAL. En esta oportunidad, los embates no provienen solamente de la Cruzada Pro Paz y Trabajo o del macabro Frente Anticomunista Salvadoreño (FAS), sino también de representantes del gobierno, como el alcalde de San Salvador y presidente del partido gobernante, Dr. Armando Calderón Sol, y del mismo Presidente de la República, Lic. Alfredo Cristiani, entre otros.

Los ataques oficiales

En el marco del recrudecimiento de la guerra, y mientras en México se desarrolla otra ronda de negociaciones entre el FMLN y el gobierno, buscando llegar a un acuerdo sobre el cese de fuego, los ataques contra ONUSAL han arreciado.

El lunes 3 de noviembre, representantes del FMLN y del gobierno reanudaron las conversaciones, de acuerdo a la agenda comprimida con la que se espera acelerar el cese del enfrentamiento armado y el logro de la paz. En esta ocasión, se busca llegar a un acuerdo con respecto a los mecanismos a seguir para la depuración de la Fuerza Armada, el desmantelamiento de los cuerpos paramilitares y la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entre otros puntos.

Entre tanto, la actividad militar ha experimentado un considerable incremento. Intensos operativos de rastreo y desalojo en las zonas de tradicional presencia guerrillera están siendo implementados por el ejército. Según fuentes periodísticas, el 30 de octubre recién pasado, en forma simultánea, la

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

Fuerza Aérea (FAS) bombardeó, roqueteó, ametralló y realizó exploraciones sobre zonas de control del FMLN, especialmente en los costados sur y norte del Cerro de Guazapa, departamento de San Salvador (que ha sido bombardeado múltiples veces durante todo el mes de octubre); el oeste del Cerro Cacahuatique, Morazán; así como en los cantones Quezera, Amatillo y Los Horcones, jurisdicción de San Francisco Javier y Ozatlán, del departamento de Usulután.

El 31 de octubre, a las 5:00 pm, aviones Dragon-Fly y A-37 de la FAS, bombardearon el área general de Perquín y San Fernando, del departamento de Morazán. Dada la densidad demográfica de la zona, se puso en peligro la vida de la población civil que habita en esos lugares. En tanto, el FMLN ha lanzado contínuos ataques a nivel nacional, que han comprendido acciones en zonas de San Salvador fuertemente vigiladas por el ejército, como la colonia Escalón. Los atentados contra el tendido eléctrico y las presas generadoras de energía han llevado a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) a prolongar el número de horas de racionamiento de la energía eléctrica que, en un primer momento, se debió a la sequía sufrida en el país.

Las críticas a ONUSAL, en un primer nivel de apreciación, parecen generarse a raíz del descontento que sectores derechistas del país manifiestan ante este sabotaje. Buscan "presionar" a ONUSAL para que "denuncie las violaciones que el FMLN comete al atacar la infraestructura nacional".

En declaraciones hechas ante los medios de comunicación, el presidente de ARENA, Dr. Armando Calderón Sol, calificó a ONUSAL como "inefectiva porque no ha desempeñado el rol que se le ha encomendado". Acusó a los miembros de la Misión de dedicarse al veraneo irresponsable en las playas del país, además de "intervenir en la política interna". Reaccionando ante la posibilidad de una reducción de la ayuda militar, sostuvo que tales recursos financieros son necesarios para que la Fuerza Armada cumpla su papel de defensa del país contra "cualquier agresión a gran escala de parte de grupos armados fuera de la ley". No deja de inquietar que en la misma línea de críticas a ONUSAL y de reacciones negativas ante los cambios que se avecinan en la Fuerza Armada, el propio Presidente Alfredo Cristiani apoye la postura de Calderón Sol, al demandar de la Misión acciones más "vigorosas", agregando que "no se puede reestructurar la Fuerza Armada mientras persista la violencia". Si bien la posición del Presidente Cristiani es más cautelosa que la del alcalde capitalino, sus planteamientos generan inquietud en términos del desarrollo de las negociaciones en México, que pretenden alcanzar resultados sobre el proceso de depuración de la Fuerza Armada.

La prensa también ataca

No sólo los voceros gubernamentales han criticado a ONUSAL. También algunos rotativos del país se han vuelto portadores de furibundos ataques, con o sin autoría responsable. Los editoriales, tanto de La Prensa Gráfica como de El Diario de Hoy, aunque más los de este último, son característicos ejemplos de una forma de efectuar crítica poco sana, destructiva e irracional, que parecen respaldar las posiciones antojadizas de Calderón Sol, tildando a los miembros de la misión de "burócratas irresponsables" que sólo se ven en las playas, cafés y restaurantes del Paseo Escalón. Como ejemplo ilustrativo de lo dicho, una diatriba publicada en la sección editorial del Diario de Hoy, el 4 de noviembre recién pasado, titulada "ONUSAL en la playa", refleja los motivos de fondo de los ataques vertidos en contra de ONUSAL. Es un ataque frontal clara y explícito contra el proceso de negociación, sobre todo por las consecuencias previsibles de éste en lo que toca directamente al ejército: "Ellos han

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

venido aquí a disfrutar de sus vacaciones y no despegarle el ojo a nuestros heroicos soldados que apuestan sus valiosas vidas con tal de garantizarnos la nuestra...pues si no fueran ellos, las hordas vandálicas ya hubieran sepultado a este noble y glorioso pueblo".

Los ataques contra ONUSAL han arreciado como reacción a los últimos acuerdos surgidos en las negociaciones y a los cambios que éstos suponen en lo concerniente a la Fuerza Armada. Los sectores de derecha no se han quedado en silencio. Utilizando sus mecanismos clandestinos de expresión, han vuelto a surgir pronunciamientos de organizaciones fantasmas. El primer señalamiento lanzado es firmado por el Frente "Mayor Armando Azmitia", que el 29 de octubre recién pasado, en un comunicado carente de toda lógica, acusó de "traidores a la patria" a quienes hicieron posible la firma de los Acuerdos de Nueva York. Asimismo, el Frente Azmitia hizo un llamado al ejército para que le exija al gobierno que deje de "conceder" y que "comience a dar protección en contra de los verdaderos violadores de los derechos humanos en el país" (**La Prensa Gráfica**, 29 de octubre).

Finalmente, y para generar honda preocupación, el Presidente Cristiani amenaza con retirar a la comisión gubernamental de las pláticas en México, si no cesa el sabotaje del FMLN.

La respuesta de ONUSAL

En cuanto a la respuesta que ONUSAL ha dado ante tanto ataque, el jefe de la Misión, Sr. Iqbal Riza, quien fue abordado en los actos de conmemoración del 180 aniversario del primer grito de Independencia, el martes 5 de noviembre, comentó que "algunos funcionarios gubernamentales no comprendían el verdadero papel de la ONUSAL" y que, por tanto, para explicar la tarea sería publicado su mandato. Este documento fue publicado en los diferentes medios informativos, el 7 de noviembre, como un "Primer Informe de Labores de ONUSAL al pueblo salvadoreño". Dicho informe precisa "que la tarea principal de ONUSAL es verificar el respecto de los derechos humanos y no el de verificar el conflicto ni la aplicación y respeto del derecho internacional humanitario".

Con igual determinación, el jefe de la Misión hizo explícito que tales ataques no cambiarían la forma de actuar de ONUSAL. Sorprendentemente, el coronel Elena Fuentes coincidió con la opinión del Sr. Iqbal Riza, comentando que las declaraciones negativas del Dr. Calderón Sol, que fueron apoyadas por el Presidente Cristiani, se debieron a que "aún no les han proporcionado detalles sobre el funcionamiento de ONUSAL" (**Diario Latino**, 6 de noviembre).

La tarea de ONUSAL

Definitivamente, el tipo de declaraciones formuladas por el presidente de ARENA muestra un desconocimiento palmario del Acuerdo de San José, de su contenido, alcances y límites. La tarea primaria de ONUSAL es verificar el respeto a los derechos humanos y los efectos que sobre la población pueda generar el conflicto armado.

Se le ha criticado a la Misión ser "un sujeto pasivo ante lo que está ocurriendo en el país", opiniones que muestran una supina ignorancia sobre el sistema de trabajo de ONUSAL, ya que ésta asume como principio de actuación un carácter de confidencialidad, bajo el cual la única manera de comunicar los resultados de su trabajo es por medio de informes al Secretario General de la ONU. Por otra parte, ONUSAL no tiene el mandato de condenar a una parte u otra. Si bien tiene que vigilar los efectos que sobre la población tiene el desarrollo del conflicto armado, su labor no es la denuncia particu-

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

larmente exigida.

El Dr. Calderón Sol afirmaba que ONUSAL no está para "intervenir en la política interna del país". Debemos recordarle al alcalde que el Acuerdo de San José es muy explícito en el mandato confiado a la ONU, al establecer que "la Misión tendrá por objeto imponerse sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador". ONUSAL tiene un amplio mandato precisamente por el poco valor atribuido a los derechos humanos en el país y la total ineficacia del Estado para asumir sus deberes, que volvió necesario confiar a la comunidad internacional un papel más activo en la verificación del respeto a los derechos humanos en El Salvador.

De nuevo los ataques a la Iglesia y las repatriaciones

En el marco de las acusaciones más o menos oficiales contra ONUSAL, se han renovado también las críticas y ataques contra la Iglesia Católica y, más explícitamente, contra Monseñor Rivera y Damas, quien durante homilía pronunciada el domingo 3 de noviembre, acusó al Destacamento Militar Número 4, con sede en San Francisco Gotera (Morazán), de continuar violando los derechos humanos al efectuar capturas sin orden judicial, con maltratos, retención ilegal y sin que los familiares puedan ver a los reos. Denunció, además, la persistente actividad de los escuadrones de la muerte, de quienes dijo que "todos sabemos actúan en connivencia con la Fuerza Armada". Las reacciones no se dejaron esperar. El coronel Francisco Elena Fuentes, comandante de la Primera Brigada de Infantería, pidió al Arzobispo que presentara las pruebas de la denunciada vinculación entre los "escuadrones" y el ejército (**El Diario de Hoy**, 6 de noviembre).

Las bien documentadas acusaciones del Arzobispo fueron catalogadas de "unilaterales" por uno de los matutinos del país, ya que, según el rotativo, no se hace alusión a "las violaciones masivas del FMLN". Habría que recordar que, en nuestro último informe, las cifras de asesinatos por motivos políticos que son responsabilidad del ejército, defensas civiles y escuadrones de la muerte suman 55 casos, en contraposición a 5 atribuibles al FMLN, entre enero y agosto de 1991; mientras que las capturas sumaron 594 en el mismo período (Ver suplemento **Proceso 493**). Esta realidad corrobora que las peores violaciones a los derechos humanos provienen más que todo del Estado, quien es el principal infractor de los compromisos contraídos en el Acuerdo de San José.

Las repatriaciones son, de nuevo, objeto de ataques verbales y difamaciones. Siempre que el FMLN desarrolla fuertes ataques militares en contra del ejército, la respuesta castrense involucra ataques y señalamientos contra aquellas organizaciones o sectores de la población que disienten del esquema planteado por el gobierno y la Fuerza Armada. El coronel Elena Fuentes ha opinado recientemente que los asentamientos como Guarjila, San José Las Flores, Las Vueltas y otros "tienen su propia afiliación con grupos beligerantes reconocidos y la organización de fachada que les asiste", calificando a los asentamientos de repatriados como "áreas de descanso" del FMLN (**El Diario de Hoy**, 5 de noviembre). Tales acusaciones, tantas veces rechazadas no sólo por los mismos afectados sino también por organismos humanitarios, parecen no cesar. Las consecuencias por todos conocidas y temidas ya han redundado en un elevado costo material y en vidas humanas.

Conclusión

La campaña de ataques contra ONUSAL es un punto de atención sumamente importante en momentos en que se están discu-

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas

tiendo temas neurálgicos en las negociaciones en México. La posibilidad de un cese de fuego y la firma de la paz que pondría punto final al conflicto armado es un elemento que debe aunar los esfuerzos de los diversos sectores del país y, especialmente, del gobierno y ejército así como del FMLN. Por ello, resulta preocupante que se ataque al principal instrumento de verificación del Acuerdo de San José, en momentos en que comienza a desarrollar su trabajo. Que estos ataques hayan sido lanzados por miembros del gobierno es signo de algo que realmente funciona mal, si no queremos pensar que obedece a una campaña orquestada que busca desprestigiar y debilitar el trabajo del más acreditado organismo internacional.

Dado el mandato bajo el cual ONUSAL debe desarrollar su labor, se reconoce que en el país no existen las condiciones previstas, en un primer momento, para el establecimiento de la Misión. La ONUSAL, por tanto, debe desarrollar un trabajo sumamente delicado, como lo es la verificación del Acuerdo en un contexto militar diferente al previsto. No se puede, por tanto, exigir de forma ignorante que su labor se desarrolle en términos diferentes a los que su mandato establece.

Las declaraciones ya publicadas la semana recién pasada por la Misión tienen como objetivo principal aclarar las "dudas" o "malentendidos" generados. No obstante, aun cuando ello debería generar una mayor comprensión del trabajo que habría que evaluar de la Misión, los ataques parecen no terminar. Los ya conocidos señalamientos sucios que lanza la prensa matutina (**El Diario de Hoy**, 11 de noviembre; **La Prensa Gráfica**, 12 y 13 de noviembre) han continuado hasta el punto de recordar los que fueron lanzados contra los jesuitas asesinados en la UCA, en el curso de sus respectivas trayectorias intelectuales y en los días que antecedieron a sus martirios.

Sin esperar que el trabajo de la Misión sea perfecto o incuestionable, con un sincero deseo por resolver los profundos problemas en que se debate la sociedad salvadoreña, debe entenderse que no será con el acoso, la difamación y amenazas que se resolverán once años de guerra. El único fruto de una actitud tan poco racional será lo que la experiencia nos ha dicho en el martirio de tantos salvadoreños. Esperemos, por tanto, que, guiados por un verdadero sentimiento nacionalista, se deje de dar luz verde a los escuadrones de la muerte para que actúen, y se pase a la reconciliación con justicia que toda la nación merece.

ONUSAL no debe ceder ante las presiones poco fundadas e irracionales que se pretende ejercer sobre ella. Mantenerse bajo lo que su mandato establece le permitirá ejercerlo justa y eficientemente, recordando a los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña que ella se ha constituido como fruto de un acuerdo entre las dos partes. Es importante que el gobierno, el FMLN y los diferentes sectores sociales muestren la tolerancia y comprensión necesarias en este momento clave para el logro de la paz y la construcción de la democracia.

ONUSAL no debe permitir que se intimide su tarea humanitaria, pues cuenta con todo el respaldo de las fuerzas populares y democráticas del país.

Digitalizado por Biblioteca "P.Florentino Idoate, S.J."
Universidad José Simeón Cañas